



Pedro López López

Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid

# Crisis y Biblioteca Pública

## La crisis

No soy un experto en Economía, desde luego, pero no parece cuestión de expertos constatar que el capitalismo de casino, y también el otro, han conducido al planeta a una situación insostenible tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista medioambiental. En este último sentido, resulta ilustrativa la catástrofe de la fuga de petróleo de la empresa BP en el golfo de México, al igual que la reciente sentencia (junio 2010) sobre la tragedia de Bophal, dictada ¡veinticinco años después! y exonerando prácticamente a los responsables de la empresa Union Carbide, nos ha recordado que dicha empresa provocó más de veinte mil muertos y ciento cincuenta mil enfermos crónicos por la fuga de cuarenta y dos toneladas de un producto altamente tóxico. Son casos extremos por la magnitud de las catástrofes, pero nada excepcionales en cuanto a modelo de conducta de las multinacionales.

En el aspecto social, la vulnerabilidad de las personas ante la enorme crisis creada por las prácticas socialmente irresponsables practicadas por especuladores y permitidas por gobiernos tanto de derechas como de "izquierdas" (hay que poner comillas, ya que hablamos del PSOE y de otros gobiernos socialdemócratas europeos que no ponen muchos peros a este capitalismo depredador), ha aumentado dramáticamente en forma de precariedad laboral, salarios de miseria, disminución de la protección social, paro y exclusión social. Estos efectos sociales, junto a otros, han dado lugar a un tipo de sociedad muy bien reflejada por autores como Viviane

Forrester (*El horror económico, Una extraña dictadura*), Richard Sennett (*La corrosión del carácter, La cultura del nuevo capitalismo*), Zygmunt Bauman (*Vida líquida, Mundo Consumo*), o Boltanski y Chiapello (*El nuevo espíritu del capitalismo*).

El discurso de la lucha de clases está para muchos pasado de moda, pero numerosos autores actuales lo siguen utilizando para reivindicar la idea de que la globalización neoliberal es la forma que ha adquirido actualmente la lucha de clases. Es el caso de uno de los más destacados, David Harvey, que explica el neoliberalismo como un ataque brutal de las clases dominantes contra los trabajadores. En su didáctica *Breve historia del neoliberalismo* comenta el tratamiento dado a la crisis fiscal de Nueva York a mediados de los años setenta, tratamiento que constituyó, según dice, "un golpe perpetrado por las instituciones financieras contra el gobierno democráticamente elegido de la ciudad, y no fue menos efectivo que el golpe militar que previamente se había producido en Chile" (1973). No parece que las prácticas actuales de las instituciones financieras a nivel mundial estén muy alejadas de este patrón.

Se dirá: claro, es normal que autores marxistas (Peter Gowan, Inmanuel Wallerstein, Eric Hobsbawm...) sigan viendo en la lucha de clases el motor de los cambios sociales. Pero tampoco hay que ser marxista para reconocer la lucha de clases. El empresario Warren Buffet, con una fortuna personal de cerca de cuarenta millones de dólares, decía en 2006: "Hay lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y estamos ganando". En Es-

"Lo peor es que el empeoramiento empieza a empeorar"



Mafalda

MGN

Una visión de la siempre fantástica Mafalda



pañá, Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, también utiliza esa categoría analítica, y precisamente un reciente artículo suyo se titulaba “La lucha de clases en la UE” (diario *Público*, 17-6-2010). ¿Qué viene a significar la lucha de clases en estas últimas décadas? Un resultado muy claro: transferencia de rentas de las clases más bajas a las clases más altas y desigualdad creciente tanto entre los países como entre las poblaciones de cada país. Por otro lado, exigencia por parte de las clases altas (véase el discurso empresarial y el de la banca) de disminución de los gastos sociales, exigencia a la que se pliegan los gobiernos. El discurso de la patronal, el de la banca y el del gobierno español ante la crisis es prácticamente el mismo, si bien para las dos primeras el discurso proviene de su tradicional avidez, mientras que para el gobierno es una cuestión de “responsabilidad”, de “gobernanza” (término que ha impuesto el neoliberalismo para referirse a la acción pública dirigida a asegurar la estabilidad del sistema... entiéndase del sistema neoliberal), o también podríamos decir que de “corresponsabilidad” con las clases dominantes del modelo económico impuesto a través del miedo (ver *La doctrina del shock* de Naomi Klein).

La financiarización descontrolada de la economía es la que ha llevado a la actual crisis. Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada da las siguientes cifras: se calcula que la economía financiera (los productos derivados, los mercados de cambio y los bursátiles) movilizan diariamente unos 5,5 billones de dólares, treinta y cinco veces más que el producto interior bruto diario y cien veces más que el volumen del comercio mundial. Esta inmensa cantidad de dinero deja en cifras ridículas lo que sería necesario para solucionar los problemas más acuciantes del planeta. Para acabar con el drama de los noventa millones de personas que pasan hambre y para dar agua potable a todo el planeta haría falta anualmente menos de un 40% de lo que el Banco Central Europeo inyectó en los mercados el 29 de septiembre de 2008, según nos cuenta Juan Torres. Susan George (p. 20) da otra cifra más escandalosa, si cabe: “En la primavera de 2009, aparecieron por arte de magia [...] unos cinco billones de dólares -5.000.000.000.000- para apuntalar las instituciones financieras”. “Esta cantidad inconcebible -dice George- se ha pedido prestada en su mayor parte al futuro. Será devuelta por los ciudadanos de nuestra época, y por sus hijos y nietos; devuelta en forma de impuestos, naturalmente, pero también de desempleo, de

servicios perdidos y, sin duda, de otras penurias que ni siquiera hemos empezado a imaginar”. Desde entonces ha habido varias inyecciones más, y estamos viendo los efectos en Europa en una oleada de recortes sociales que augura un inquietante futuro.

## Los servicios públicos, en el punto de mira

Desde un punto de vista social, las medidas a tomar supuestamente para salir de la crisis, sólo pueden ser rechazadas firmemente. No son recortes sociales lo que demanda la crisis, sino que precisamente en tiempos de crisis hay que reforzar el gasto social para proteger a las capas más vulnerables de la población. En este sentido habla el Manifiesto de las Organizaciones Miembro de la Coordinadora ONGD-España frente al incumplimiento de los compromisos en cooperación al desarrollo (“Las personas primero. Desarrollo humano y crisis financiera”), redactado en junio de 2010, pidiendo que se “impulsen medidas de lucha contra la crisis, que se dirijan prioritariamente hacia los responsables y causantes de la misma”, que los líderes políticos y de gobierno “reiteren su compromiso con la lucha contra la pobreza, con el Desarrollo Humano y con los Objetivos del Milenio” y que se reconsideren las medidas de recorte social. En el manifiesto se dice que la ayuda oficial al desarrollo no es un lujo para tiempos de bonanza. Parafraseando esta expresión, podemos decir que los derechos sociales, como la biblioteca, no son un lujo para tiempos de bonanza.

Los derechos sociales, y los servicios públicos como instrumento de los mismos, son conquistas conseguidas por la clase trabajadora; se trata de una cuestión de reparto. Vicenç Navarro señala en sus múltiples trabajos (ver [www.vnavarro.org/](http://www.vnavarro.org/)) las falacias del discurso neoliberal, como la del gasto público excesivo. España es uno de los países de la UE que menos gasto social tiene. Pero, además, en el artículo antes citado, Navarro señala que los países nórdicos están entre los más “globalizados” del planeta, cuando parece que “globalización” tendría que significar poco gasto social y salarios bajos. Y lo están “a pesar” de su elevado gasto social, sus elevados impuestos y sus elevados salarios, tres elementos en contra de la “buena globalización”. Por tanto, es falso el mensaje de que el Estado del Bienestar sale muy caro y no hay dinero para mantenerlo.

Tan falso como el tremendista mensaje sobre la inviabilidad futura de las pensiones o sobre otros gastos sociales. De lo que se trata es de meter miedo al ciudadano para que acepte más y más recortes renunciando a las conquistas sociales de más de un siglo de luchas. Muy gráficamente, Gaspar Llamazares se refería en un reciente artículo (*Público*, 16-6-10) a la “estrategia Tarantino”.

El ataque a lo público forma parte de la ofensiva neoliberal. La gestión empresarial es el modelo, y hay que desacreditar todo lo público: la administración pública, los servicios públicos, los funcionarios... Y ello, a pesar de que cada vez se acumulan más datos que evidencian la mala gestión de las entidades privadas para atender servicios públicos como la sanidad, los transportes o la educación.

No puede entenderse que varias décadas después de promulgarse la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), países desarrollados pertenecientes al llamado Primer Mundo, tengan que plantearse la viabilidad de servicios sociales. ¿Acaso los recursos son menores que hace medio siglo? ¿Podían imaginar los redactores de estos textos que varias décadas después el planeta no tendría recursos para cubrir los derechos sociales “indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” (art. 22, Declaración Universal)? ¿Podían imaginar que el planeta no podría dar un nivel de vida adecuado a toda persona (art. 25, Declaración Universal)? La población ha aumentado, así como la esperanza de vida, pero los recursos lo han hecho en mayor medida. En ningún momento los redactores de éstos y otros textos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos indican que los derechos humanos, o parte de ellos, están supeditados a la marcha de la economía. Sí es cierto que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se acepta una cierta flexibilidad en cuanto a la puesta en marcha de estos derechos en función de la realidad económica de países que tengan dificultades, pero, por un lado, el Pacto está redactado en 1966 (¿cuarenta y cuatro años después, es necesaria esa flexibilidad?) y, por otro lado, desde luego Europa en su conjunto no puede considerarse que sea una zona especialmente débil económicamente.

Por tanto, estamos ante un problema de reparto del producto social, no de falta de recursos. Es rotundamente falso el mensaje repetido de que el Estado del Bienestar no puede sostenerse. Lo único que



ocurre desde hace tres décadas es que las clases dominantes pretenden cuestionar el reparto al que se llegó en Europa entre la Segunda Guerra Mundial y los años setenta. Es más, tras la crisis de 1929, los servicios públicos pasaron de ser un paliativo de los fallos del mercado a ser un instrumento de regulación del capitalismo (Attac, 2007). La guerra de clases a la que se refieren diversos autores consiste en que las clases dominantes rechazan la regulación y buscan beneficios desorbitados por encima de los costes sociales que el modelo neoliberal está provocando. Y tampoco les importa el aberrante modelo político en que está degenerando la democracia. Decía el filósofo Slavoj Žižek en una entrevista reciente (*El País*, 16-6-10) que el futuro de la democracia es Berlusconi. A los que tenemos conciencia ciudadana nos aterra este panorama, pero el capitalismo y “los mercados” conviven perfectamente con esta aberración.

## La biblioteca, servicio público irrenunciable

La biblioteca forma parte de los derechos sociales conseguidos a lo largo del último siglo. Como hemos señalado más arriba, en 1966 se promulgó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en 1976. Su artículo 15 reconoce el derecho de toda persona a participar en la vida cultural (punto 1.a), y conmina a los Estados a “adoptar medidas para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura”. Sin duda, la biblioteca es una de las principales medidas que pueden adoptar los Estados para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de acceso a la cultura y a la información.

Nuestro marco de referencia ético, jurídico y político debe estar en los textos emanados de las Naciones Unidas y otros órganos que tienen como guía la Declaración Universal de Derechos Humanos, y no en los emanados de la Organización Mundial del Comercio, cuya referencia son acuerdos comerciales que pretenden privatizar toda actividad humana y convertir en negocio los servicios públicos.

En el diario *Público* de 20 de junio de 2010 leo la siguiente anécdota referida al alcalde de Barcelona en 1935, Joan Pich i Pon. Contemplaba el alcalde extasiado la ciudad desde el Tibidabo, y ante esa vista la exclamación que salió de su boca fue: “¡Cuánta propiedad inmobiliaria!”. La

anécdota refleja bien el espíritu del capitalismo voraz en el que estamos inmersos. Donde los ciudadanos vemos naturaleza, arte, convivencia, cultura... los “emprendedores” sólo ven negocios. Este capitalismo y los tiburones de la bolsa son los que dirigen el proceso general que el mundo está viviendo bajo directrices cada vez más asfixiantes emanadas de una tríada económica letal para los derechos humanos: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Bajo sus recetas, los beneficios del trabajo humano quedan privatizados, mientras que los costes quedan socializados. Bajo sus recetas, los derechos sociales deben desaparecer para acatar los designios de “los mercados”. Y lo cierto es que esta casta antisocial ha impuesto su visión.

Pero dejar que asuntos como la salud, la educación, las pensiones o la cultura sean dirigidos por élites económicas sin límite en su codicia, es suicida para la especie humana.

El mundo de la biblioteca representa un espacio de resistencia a esta lógica depredadora, y así debe seguir siendo. El problema de directivas como la que obliga a las bibliotecas a pagar por el préstamo de libros y otros materiales, es, más que el coste mismo, que introduce la lógica mercantil en la biblioteca gravando un servicio público que es gratuito, con el mismo criterio que una actividad comercial. La visión del manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública debe ser defendida, de manera que la biblioteca sea un espacio público, de ciudadanía, de convivencia, de cohesión social, de promoción de los derechos humanos y los valores democráticos, como encontramos en numerosos textos, donde no rija la lógica del lucro y de la mercantilización.

En tiempos de crisis, la biblioteca es un refugio para miles de ciudadanos con pocos recursos. En febrero de 2010 se redactó la “Declaración de Murcia sobre la Acción social y educativa de las bibliotecas públicas en tiempo de crisis”. En ella se dice que las bibliotecas cumplen una función social y educativa en todo momento, pero, “particularmente, pueden ser un recurso fundamental de inclusión y promoción social cuando la crisis económica incrementa el número de personas en paro, precariedad laboral, vulnerabilidad o exclusión social”. En épocas de crisis especialmente “hay que transmitir y hacer que la sociedad conozca la función de la biblioteca como institución de formación permanente, inclusión social y puerta de acceso a la sociedad de la información para todos”. Además, se dice, “la biblio-

teca debe atender especialmente las necesidades inclusivas y educativas de las personas y colectivos más vulnerables”. Por último, la Declaración señala que la crisis económica puede convertirse precisamente en una oportunidad de incrementar la utilidad de la biblioteca “y lograr el máximo reconocimiento de su labor informativa, educativa, cultural y social”.

En el número 174 de *EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA* (noviembre-diciembre, 2009) aparece una entrevista a Jim Rettig, presidente saliente de la ALA, en la que se le pregunta precisamente por la repercusión de la crisis en las bibliotecas. En su respuesta decía que “las bibliotecas públicas son en muchas comunidades el único lugar donde se puede tener acceso gratuito a Internet... Las bibliotecas públicas además ayudan a la población que no ha tenido que usar el ordenador en su vida laboral, a aprender a manejarlo y utilizarlo para participar de procesos de selección de personal”. En Estados Unidos, las bibliotecas de primer ciclo universitario también enseñan nuevas habilidades laborales para desempleados, destacaba el señor Rettig. Y, por último, decía, “las bibliotecas son las primeras que responden ante la recesión”.

En relación con lo anterior, recuérdese que la ampulosa expresión “sociedad de la información” vela una cruda realidad: de toda la población mundial, sólo un 10% tiene acceso a las nuevas tecnologías. Es la famosa “brecha digital”. Naturalmente, aunque ese 10% está situado en los países más desarrollados (dejo de lado ahora el problemático concepto de “países desarrollados”), incluso en éstos existe un llamado “Cuarto Mundo” formado por un sector creciente de personas excluidas.

Es en momentos de crisis cuando la biblioteca pública debe dar todo de sí para destacar su compromiso social con una ciudadanía agobiada por los problemas económicos. Es en momentos de crisis donde la biblioteca se convierte en un refugio para muchos ciudadanos, en uno de los pocos espacios públicos que todavía escapan a la voracidad neoliberal. ▶

### Bibliografía

- ATTAC. *Hacia el malestar social: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y la supresión de derechos sociales mediante la privatización de los servicios públicos*. Madrid: Attac, 2007
- GEORGE, Susan. *Sus crisis, nuestras soluciones*. Madrid: Icaria/Intermón Oxfam, 2010
- MARTÍNEZ LOECHES, A. Entrevista a Jim Rettig, Presidente saliente de ALA. *EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA*, 2009, nº 174, pp. 42-46
- TORRES LÓPEZ, Juan. *La crisis financiera: Guía para entenderla y explicarla*. Madrid: Attac, 2009